

Una buena parte de la educación municipal está en crisis. Los problemas financieros son reiterados en algunos municipios de la Región del Bío-bío, muchos de ellos a la espera de ser traspasados al modelo de Nueva Educación Pública que impulsó en su momento Michel Bachelet. En esa materia, Bío-bío cuenta con los servicios locales (SLEP) Andalién Sur, Andalién Costa y Puelche, y ya se aprestan otros como Los Copihues, que sumará a Los Angeles, Cabrero y Yumbel –este año inicia su puesta en marcha con miras a concretar el traspaso de los establecimientos en 2027–, y La Caletas, que integrará a Talcahuano, Penco, Hualpén y Tomé. Ahí, el traspaso definitivo se proyecta para 2029.

A nivel del Gran Concepción, el caso más crítico parece ser el de Talcahuano, que arrastra un déficit de \$9.500 millones, el que viene de gestiones previas y que abarcan tanto sueldos como cotizaciones impagas. Según el municipio, la afectación llega directamente a 1.800 trabajadores, razón suficiente para respaldar la solicitud de un administrador provisional capaz de aplacar el problema. Tras una de las últimas reuniones con el Gobierno, el alcalde Eduardo Saavedra informó sobre medidas temporales como un convenio de transición y la inyección de \$800 millones al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, y avances en la designación del administrador, con el que se espera contar a partir de agosto.

En una reunión sostenida este viernes con el ministro Nicolás Cataldo, en Temuco, el alcalde aseguró que este mes de julio los sueldos de los trabajadores estarán en sus cuentas bancarias. “Y, de acuerdo a lo que planteó el ministro, en las próximas semanas podríamos tener una respuesta concreta respecto a la llegada de un administrador provisional”, dijo.

SITUACIONES COMPLEJAS, DELICADAS Y DESORDEN

En ciudades como Hualpén, Penco y Tomé ocurre algo similar, al extremo de que algunas, incluso, advierten que están a nada de vivir lo que hoy sufre Talcahuano. Italo Cáceres, alcalde tomoecino, señala que el escenario con que encontró a la Dirección de Educación Municipal es complejo, tanto en lo financiero como en lo administrativo. Precisa que ahí existe un déficit estructural y financiero que se arrastra desde años anteriores, lo que ha obligado al municipio, en lo que va del año, a destinar más de \$1.200 millones de fondos propios, con el fin de evitar la paralización del sistema educativo comunal.

“Cabe destacar que la interrupción de servicios no se ha efectuado precisamente porque ha sido el municipio el que ha absorbido ese desfinanciamiento”, enfatiza. Entre las complicaciones están la necesidad urgente de financiar transporte escolar para estudiantes de sectores rurales como Coliumo, el riesgo latente de no poder pagar remuneraciones ni cotizaciones previsionales a docentes y asistentes de la educación, y falencias graves en la infraestructura educativa, que han obligado a realizar intervenciones urgentes y costosas para garantizar la continuidad del servicio. “Como municipio requerimos con urgencia que se reconozca y respalde financieramente el es-



En Penco plantean que con los esfuerzos realizados han logrado que su educación se mantenga sin inconvenientes.

Municipios abordan el complejo escenario que enfrentan

Los montos millonarios que deja la crisis educativa

Hay casos similares a los de Talcahuano, aunque de un menor calibre. En Tomé, Penco y Hualpén hablan de escenarios delicados y complejos, por lo que requieren de una presencia estatal más fuerte para financiar transporte escolar y evitar la fusión de establecimientos, por ejemplo.

Por Nicolás Arrau Álvarez / nicolas.ave@diarioelsur.cl

fuerzo que hemos asumido para sostener la educación pública en Tomé. Esperamos que los resultados de la auditoría en curso permitan establecer con claridad la magnitud del déficit y se adopten medidas correctivas a nivel central. Respecto al traspaso al SLEP, estamos conscientes de que este proceso requiere coherencia financiera, administrativa y técnica, por lo que es fundamental que se corrijan las debilidades actuales para garantizar una transición ordenada y sin afectar a las comunidades escolares”, sostiene Cáceres, quien enfatiza que el municipio está dispuesto a colaborar activamente en este proceso, “pero también necesitamos que el Estado asuma un rol más protagónico en la solución de las falencias estructurales heredadas”.

En Hualpén el escenario es, de hecho, delicado, según el alcalde Miguel Rivera. Los grandes esfuerzos económicos y de gestión “ho están en el pago de remuneraciones, principalmente, frente a un déficit de \$1.500 millones este 2025 y que para 2026 llegará a \$2.000 millones. “Ese déficit lo cubrimos con dinero de la municipalidad, recursos que sacamos de otras prioridades para cubrir la educación comunal”, lamenta.

En su caso, señala que una de las causas fundamentales ha sido la disminución nacional de matrículas, “donde vemos que para el año 2005 la participación era del 50%, es decir, la mitad de los niños estudiaban en la educación pública, pero hoy es de sólo el 33%. Otros factores gatillantes tiene que ver con la baja de asistencia a clases durante la última década, que merma la subvención que entrega el Ministerio de Educación, y la aparición de normas y leyes que son positivas en la calidad de la educación, “pero que se aprobaron sin financiamiento, como las leyes TEA, de titularidad, o carrera docente”.

“Como municipalidad estamos obligados a tomar medidas drásticas, o no estaremos en condiciones de cumplir las obliga-

ciones mínimas para pagos de remuneraciones. Hay que ver que los fondos provenientes desde el Estado han ido bajando. Por eso necesitamos recursos adicionales, o cambios en la estructura base de financiamiento del Estado. Estamos obligados a hacer gestiones dolorosas como la fusión de establecimientos”, señala Rivera.

Ya en Penco, el problema se ajusta a un “desorden administrativo y financiero” que fue detectado gracias a un informe emanado desde la Contraloría de la República y respaldado por una resolución exenta de la Superintendencia de Educación. Desde el municipio plantean que este documento da cuenta de gastos rechazados que sobrepasan los \$2.000 millones, que hoy son deuda con el Fisco, y que por eso el municipio se querreló contra quienes resulten responsables, además de entregar todos

los antecedentes a la Fiscalía Económica. Pese a todo, el alcalde Rodrigo Vera señala que su administración ha logrado que la educación se mantenga sin inconvenientes en todos los establecimientos de la comuna, “pero lo más doloroso es que los recursos nunca llegaron a los colegios, ni tampoco a los estudiantes, que son quienes más los necesitan”. Por eso, afirma que es inaceptable que sus colegios presenten problemas de infraestructura, que sus estudiantes carezcan de material didáctico e insumos de apoyo a la docencia, o que los niños con necesidades educativas especiales, como los del programa PIE o los alumnos TEA, no hayan recibido el apoyo que por ley les correspondía.

“Nosotros seguimos trabajando, y nuestro enfoque está en rescatar y solicitar los recursos necesarios para ordenar las arcas y

mejorar la infraestructura de nuestros establecimientos, además del ajuste de la dotación”, dice el jefe comunal.

EL CASO ANGELINO

EL SUR también tomó contacto con el equipo de Comunicaciones de Los Angeles para conocer el estado de su Departamento de Administración de Educación

Municipal. Aunque al inicio se comprometió la gestión de una respuesta, a la hora de cierre de esta edición esta nunca llegó.

Durante febrero pasado se informó que la crisis angelina llegaba a los \$8.000 millones. Esta semana, además, la concejala Paola Ortiz (independiente-DEMócratas) interpelló al alcalde Jorge Pérez por contrataciones realizadas en medio de esta fuerte crisis que experimenta la administración del exdiputado. La edil puso su énfasis en incorporaciones realizadas por designación directa del alcalde y sin concurso público, así como el caso de un funcionario recién contratado que percibe una remuneración “bastante superior” a la que recibe un trabajador de similares funciones.

Ortiz también cuestionó la contratación directa del presidente del Partido Radical de Los Angeles –tienda a la que pertenece Pérez–, con una remuneración que superaría los \$2,5 millones.

La concejala UDI Consuelo Perello cuenta que a la fecha se ha propuesto una serie de medidas paliativas para disminuir el déficit, las que ya fueron presentadas al Concejo Municipal para ser aplicadas en 2026. Por ejemplo, la fusión de cursos, es decir, si en un colegio hay dos primeros básicos con 10 alumnos, la idea es que se genere uno solo. “Pero la situación general deficitaria es preocupante, por lo que estamos atentos a las propuestas y decisiones del alcalde. Hemos estado haciendo las consultas en relación a los sueldos e imposiciones, que en este municipio se encuentran pagadas y al día. En ese aspecto, no hay un déficit”, asegura.

Según la edil, el problema responde a una disminución importante de las matrículas luego de la pandemia. “Este es un DAEM grande, con más de 14.000 alumnos, 59 establecimientos y 3.000 funcionarios (...) Desde la pandemia ha habido una baja sostenida, de más de 3.000 alumnos, lo que hace que el problema se incremente y haya una bomba de tiempo”, dice Perello, quien, sobre la denuncia de Ortiz, señala que el alcalde tiene la facultad de contratar a las personas que considere dentro de sus parámetros, que la comunicación con él “es bastante expedita” y que están a la espera de las consultas realizadas sean respondidas a la brevedad.



Talcahuano sufre una de las peores crisis de la Región. Están a la espera de un administrador provisional.

DATOS relevantes

Matrícula

El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, cuenta que el déficit que enfrenta su comuna se debe a la baja que ha tenido la matrícula municipal, así como a la caída que ha tenido la asistencia y el surgimiento de leyes que se aprueban sin financiamiento.

Los Ángeles

En Los Angeles la crisis de la educación llega a los \$5.000 millones. Concejales cuestionaron las contrataciones directas en medio de la crisis, aunque aclaran que hasta el momento los sueldos y cotizaciones sí han sido pagados.